

Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno.

**VISTOS:**

En los antecedentes RUC N° 1701165262-K y RIT 30-2020, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, se dictó sentencia el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, por la que se absolvió a María José Mosquera Flores y Luisa Del Rosario Barraza Castillo del cargo formulado en su contra de ser autoras del delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, acontecido el día 30 de marzo de 2018.

La misma sentencia condenó a Alberto Rodolfo González Olivares, como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, perpetrado en la comuna de Coquimbo, el día 30 de marzo de 2018, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, al pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales, a la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y al comiso de \$18.200 (dieciocho mil doscientos pesos). Se dispuso el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad impuesta, reconociéndole los abonos que indica.

De igual modo se condenó a Víctor José Silva Cubillos, como autor de un delito consumado de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, perpetrado en la comuna de Coquimbo el mismo día, a la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, al pago de una multa de diez unidades tributarias mensuales, a la accesoria legal de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y al comiso de \$363.000 (trescientos sesenta y tres mil pesos). Se le sustituyó la pena privativa de libertad impuesta por la de libertad vigilada por igual término y



cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento, con las condiciones legales de las letras a), b), c) y d) del artículo 17 de la Ley 18.216.

En contra del referido fallo solo la defensa del imputado Alberto Rodolfo González Olivares interpuso recurso de nulidad, el que se conoció en la audiencia de veintiocho de julio pasado, citándose a los intervinientes a la lectura del fallo para el día de hoy, según consta del acta levantada al efecto.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el recurso de nulidad interpuesto en favor de Alberto Rodolfo González Olivares, se sustentó en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, por la infracción sustancial de derechos o garantías asegurados en la Constitución Política o en los Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, según relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, vulnerándose los derechos a la libertad e inviolabilidad del hogar del acusado, al haber transgredido el art. 8° inc. 2° de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, art. 8° inc. 2° de la Constitución Política de la República, art. 36 del Código adjetivo penal y lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 4° y 25 de la Ley N°20.000, transgresiones materializadas al obtener una orden de entrada y registro del domicilio de Alberto Rodolfo González Olivares fuera de los casos que autoriza la ley.

Desarrollando el primer acápite de su arbitrio, el impugnante explicó que producto de denuncias anónimas que sindicaban a los sujetos apodados “Pokemón”, “Brayan”, “Luisa” y “Viejo Nelsón”, como vendedores de sustancias ilícitas en la intersección de Pasaje Los Chañares con Avda. Alessandri, sector las Torres, de la comuna de Coquimbo, la Policía de Investigaciones solicitó a



la Fiscalía Local de Coquimbo una orden de investigar. Producto de lo anterior –continúa el recurrente- el Ministerio Público les ordenó efectuar vigilancias discretas al inmueble ubicado en pasaje Los Chañares con avenida Alessandri, instruyéndoles además que para el evento que observaran hechos relacionados con el delito de tráfico de estupefacientes, se alertara al fiscal de turno. Es en estas circunstancias que los funcionarios policiales grabaron a Víctor Silva Cubillos realizando una conducta que se atribuyó a tráfico de pequeñas cantidades de drogas, individuo que se encontraba “cerca” del acusado. Producto de lo anterior, agrega el recurrente, que el día 7 de marzo del año 2018, el funcionario Francisco Ramírez Balbontín, solicitó autorización al fiscal para poder actuar conforme a la técnica del agente revelador, siendo facultado por la magistratura. Arguye que dicho agente informó haber adquirido a su representado dos papelines contenedoras de una sustancia dubitada como cocaína base, lo que motivó que el día 23 de marzo del año 2018, el Sr. juez de garantía otorgara la cuestionada orden de entrada y registro, entre otros, al domicilio de González Olivares, la cual se materializó el 30 de marzo del año 2018, incautándose en el interior del inmueble diversas sustancias dubitadas como estupefacientes o psicotrópicas, por lo que se procedió a su detención.

Agrega, que en su concepto, no había evidencia que el acusado González Olivares estuviera comercializando drogas. En efecto, no fue grabado efectuando ninguna transacción, el agente revelador que habría participado en la venta de la sustancia no depuso en juicio por lo que aquella comercialización no fue corroborada y, finalmente, el informe pericial concluyó que, si bien las dos papelines incautadas contenían cocaína, la cantidad era insuficiente para ser valorada, por lo que no se estableció que aquella



sustancia fuera de aquellas que provocan graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud pública, careciendo por ello de la necesaria antijuridicidad material para ser constitutiva de delito. En consecuencia – concluye el recurrente- la autorización de entrada y registro efectuada al domicilio de González Olivares no tenía sustento fáctico, vulnerando con ello la inviolabilidad de su hogar consagrado en el art. 19 N°5 de la Carta Fundamental.

Por el siguiente apartado denuncia la falta de fiabilidad de la cadena de custodia de la sustancia incautada, afirmando que entre el oficio N°268 de fecha 30 de marzo del año 2018 y el acta de recepción N°12164/2018 de fecha 2 de abril del año 2018, transcurrió en exceso el plazo de 24 horas, lo que vulnera el artículo 41 de la Ley 20.000. Además, pone de relieve las discrepancias existentes entre las cantidades brutas y netas que se pusieron a disposición del Servicio de Salud.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso impetrado, invalidándose el juicio y la sentencia que lo antecedió, disponiendo la realización de una nueva audiencia de juicio oral, por jueces no inhabilitados, con la exclusión de la prueba que detalla.

**SEGUNDO:** Que, para un adecuado entendimiento de lo que debe resolverse, es conveniente recordar, en lo pertinente al recurso, que los jueces del Tribunal Oral tuvieron por establecido los siguientes hechos.

*“El día 7 de marzo del año 2018, a las 20:22 horas aproximadamente, en el inmueble de calle Los Chañares N° 1209, Sector Las Torres, Coquimbo, Alberto Rodolfo González Olivares, vendió, al Inspector de la Policía de Investigaciones de Chile Francisco Ramírez Balbontín, previamente designado como agente revelador, dos envoltorios de papel contenedores de 0.10 gramos*



*netos de cocaína base, en la suma de \$2.000. Posteriormente, el día 30 de marzo de 2018, cerca de las 07:30 horas, funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de autorización de entrada y registro otorgada el día 23 de marzo de 2018, por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, ingresaron al inmueble ubicado en Los Chañares N° 1209, las Torres, Coquimbo, sorprendiendo a Alberto Rodolfo González Olivares poseyendo y guardando al interior del inmueble referido, sobre un microondas, un monedero color amarillo con 24 envoltorios papel blanco cuadriculado contenedores de 0.88 gramos netos de cocaína base, en un cajón de un mueble de cocina, una bolsa de nylon color rojo con 140 envoltorios de papel blanco cuadriculado contenedores de 9.80 gramos netos de cocaína base, en un mueble, una bolsa de nylon transparente contenedora de 39.86 gramos netos de cocaína, y un envoltorio papel revista contenedor de 0,26 gramos netos de cocaína, además de la suma de \$18.200 en dinero efectivo.”*

Los sucesos descritos fueron calificados como constitutivos del delito consumado de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades.

**TERCERO:** Que, de lo referido en el fundamento primero que antecede, se advierte que las afectaciones que acusa la defensa dicen relación con la recolección de evidencia que se tacha de ilícita, inmersa, según su parecer, en un procedimiento de vigilancias y uso de la técnica de agente revelador sin demostrar los presupuestos que las harían procedentes, para su posterior incorporación y valoración en el juicio oral. En particular se cuestiona la realización de diligencias investigativas policiales de cuya intervención arranca, de modo trascendental, la imputación delictiva contra el condenado Alberto Rodolfo González Olivares como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes que el fallo da por concurrente.



**CUARTO:** Que en relación a los cuestionamientos levantados en la causal en estudio, los jueces expresaron en el razonamiento décimo quinto del fallo impugnado que “conforme lo señala la misma Ley 20.000 en el Título II, la figura del agente revelador es una técnica de investigación especialmente reconocida por el legislador para esta clase de delitos, dada la complejidad investigativa que muchas veces presentan. Además, como técnica de investigación que es —y no habiéndose estimado necesario por el legislador regular su procedencia a través de la intervención judicial, como si lo estimó en el artículo 24 de la misma ley, a propósito de las medidas de retención e incautación de correspondencia, obtención de copias de comunicaciones o transmisiones, interceptación de comunicaciones telefónicas y uso de otros medios técnicos de investigación— la decisión sobre su aplicación en una investigación en curso, es resorte exclusivo del Ministerio Público y, en particular, del Fiscal adjunto encargado de aquella, en virtud de lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución y artículo 1 de la Ley N° 19.640, situación que no cambia por la exigencia legal de observar el principio de la probidad administrativa que el artículo 8 de la citada ley establece, y que esgrimió el defensor en apoyo a su tesis.”

A continuación expresó que “tampoco parece razonable impugnar los efectos de la diligencia llevada a cabo por el agente revelador, fundado en que el análisis químico de la sustancia obtenida como consecuencia de ella haya arrojado como resultado ‘COCAINA (Cantidad insuficiente para valorar)’, lo que implicaría que no puede ser catalogada como aquellas sustancias capaces de provocar graves efectos tóxicos en la salud pública, dado que no se ha obtenido su pureza. Lo anterior, por cuanto el objeto de esta diligencia es dar un grado mayor de certeza a los indicios que hasta ese momento tenía el



persecutor de que en dicho domicilio se traficaba droga, de manera tal de quedar en posición de emprender otras diligencias investigativas, como la entrada y registro del inmueble, que pudieran conducir a obtener evidencia suficiente para sustentar su caso. Por lo anterior, no puede aplicarse a esta entelequia el mismo estándar de convicción que impone el artículo 340 al tribunal llamado a conocer de la acusación, pues de lo contrario la investigación de esta clase de delitos sería impracticable, lo que ciertamente no ha sido lo querido por el legislador. Por lo demás, no debe olvidarse que, si bien el informe químico no pudo valorar el porcentaje de pureza de la sustancia analizada, producto de su exigua cantidad, si estableció que se trataba de cocaína, lo que por cierto constituye un antecedente concreto que justificaba la solicitud de otras diligencias de investigación que permitieran corroborar los indicios claros de la actividad de tráfico”.

En relación a la segundo reproche esgrimido por el arbitrio los sentenciadores expresaron “si bien el artículo 41 de la Ley N° 20.000 establece un plazo de 24 horas para que las sustancias incautadas por las policías sean remitidas al Servicio de Salud correspondiente, el artículo 42 de la misma ley, se encarga de establecer como sanción específica para dicha infracción, la aplicación de una multa al funcionario responsable, sin que haya disposición alguna que castigue esa contravención a deberes administrativos con una sanción tan drástica como la nulidad de todo el procedimiento. De este modo, la sola actuación fuera de plazo no puede configurar una infracción sustancial de garantías constitucionales, ya que no ha ocasionado al interviniente un perjuicio reparable sólo con la declaración de nulidad, perjuicio que solo surgirá, en la medida que la inobservancia de las formas procesales atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de las partes en el



procedimiento, conforme a lo previsto en el artículo 159 del Código Procesal Penal. Por lo demás, las sospechas o dudas que esboza la defensa, en cuanto a una eventual manipulación de la prueba producto del retardo en el envío de las sustancias incautadas, no es más que eso, dudas y sospechas, sin contenido fáctico que las sustente, ya la sola diferencia en el peso consignado en el parte policial en relación con aquel señalado en el acta de recepción no resulta indiciaria de manipulación o alteración de la cadena de custodia. En efecto, es una máxima de la experiencia que los servicios policiales registran el 'peso bruto' de la droga incautada, es decir, pesan tanto la sustancia como el contenedor de esta -papeles, bolsas, frascos, etc.- en tanto que el servicio de salud registra, normalmente en el acta de recepción, el 'peso neto' de la droga, esto es, el peso de la sustancia separada de sus contenedores. Lo anterior, conlleva la razonable y obvia diferencia de peso registrado en el parte policial o en los oficios remisores de la policía y el peso registrado por el servicio de salud al momento de recibir las sustancias incautadas, por lo que en caso alguno puede servir para introducir dudas sobre su manipulación o alteración".

Producto que lo anterior los jueces coligieron que "el solo incumplimiento del plazo legal para remitir las sustancias incautadas al servicio de salud, por sí solo, no puede llevar a concluir que hubo una manipulación de la prueba obtenida por la policía, ya que para ello era preciso que se hubiera al menos levantado -y porque no decirlo acreditado- una tesis fáctica que evidenciara de forma clara y evidente dicha situación durante el devenir del juicio, de forma tal de explicar coherentemente en qué consistió dicha manipulación y cómo influyó ésta en la descripción factual del hecho, permitiendo al tribunal llegar a la conclusión de que en los hechos hubo una infracción sustancial las garantías





del enjuiciado, que permite justificar razonablemente la omisión del deber legal de ponderar toda la prueba rendida en el juicio.”

**QUINTO:** Que a fin de dirimir lo planteado por los recurrentes, desde que las circunstancias que motivaron el ingreso a los domicilios de los imputados –entre ellos el del impugnante- fueron materia de prueba y debate en el proceso, es menester estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, efectúe una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los determinados por el tribunal del grado, porque ello quebranta de manera evidente las máximas de oralidad, inmediación y bilateralidad de la audiencia, que rigen la incorporación y valoración de la prueba en este sistema procesal penal, ya que implicaría que este tribunal de nulidad, únicamente con la reproducción parcial de los documentos y testimonios rendidos en el juicio –sólo de lo que interesa a los recurrentes-, diera por acreditados hechos distintos y opuestos a los que los magistrados extrajeron de esos elementos, no obstante que los jueces apreciaron íntegra y directamente su rendición, incluso el examen y contra examen de los contendientes, así como hicieron las consultas necesarias para aclarar sus dudas, y de aceptarse, entonces la tesis del recurrente, simplemente transformaría a esta Corte, en lo atinente a los hechos en que se construye esta causal de nulidad, en un tribunal de segunda instancia, lo cual, huelga explicar, resulta inaceptable.

**SEXTO:** Que, en ese orden, conforme a los sustratos fácticos establecidos por los jueces orales, el fallo tuvo por cierto que los funcionarios policiales luego de haber recibido denuncias anónimas en relación a la venta de sustancias ilícitas, obtuvieron del Ministerio Público una orden de investigar



para observar los domicilios de los imputados, lo que seguidamente motivó la solicitud al fiscal de turno para utilizar la técnica del agente revelador, para finalmente obtener del juez de garantía una orden de entrada y registro al inmueble del acusado, lugar en el que encontraron diversos tipos de droga, que era, el objeto material del delito investigado.

**SÉPTIMO:** En nada obsta a la afirmación arribada precedentemente, el que las vigilancias discretas y observaciones de que se valieron los policías para justificar las diligencias intrusivas que les fueran otorgadas, no se efectuaran específicamente en el domicilio de González Olivares, sino en su proximidad, ni que se obviara la declaración el agente revelador, -como denuncia el recurrente-, puesto que dicha información fue introducida durante la audiencia de juicio oral por dos de los funcionarios policiales que participaron en el procedimiento, conforme da cuenta el fallo en estudio, circunstancia que por lo demás fue reconocida por el propio abogado impugnante en estrados.

Tampoco contradice las conclusiones a las que arribaron los sentenciadores la falta del informe de pureza de los dos papelillos incautados al agente revelador, considerando que la cantidad de la sustancia era insuficiente para valorar y que aquel informe arrojó resultado positivo para la cocaína, lo que en definitiva constituyó uno de los fundamentos que ponderó el juez de garantía para el otorgamiento de la orden de entrada y registro al domicilio del acusado González Olivares, desde donde se incautó aproximadamente 50 gramos de cocaína y pasta base, cuya pureza si fue establecida con los correspondientes informes periciales.

**OCTAVO:** Que, de ese modo, los policías actuaron conforme a las facultades concedidas por la ley, previa instrucción del fiscal y autorización del juez de garantía y, por consiguiente, los jueces que valoraron la prueba



proveniente de dichas actuaciones no afectaron los derechos referidos en el recurso, motivos por los cuales el primer capítulo de la causal del arbitrio de nulidad impetrado debe ser desestimada.

**NOVENO:** Que corresponde ahora abocarse al conocimiento de la segunda sección de la causal del recurso de nulidad invocado, que se sustenta en la conculcación del debido proceso, en su vertiente de la legalidad de los actos del procedimiento.

Que, para resolver dicho reproche conviene tener presente que el artículo 41 de la Ley N° 20.000 señala que: *“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, las sustancias y especies a que se refieren los artículos 1º, 2º, 5º y 8º y, en su caso, las materias primas empleadas en su elaboración, que sean incautadas en conformidad a la ley, deberán ser entregadas dentro de las veinticuatro horas siguientes al Servicio de Salud que corresponda [...]”*.

Por su parte, el artículo 42 dispone que: *“Los funcionarios responsables del retardo en el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo anterior serán sancionados con una multa a beneficio fiscal equivalente al cinco por ciento de su remuneración imponible mensual, por cada día de atraso, sin que pueda exceder del total de dicha remuneración”*.

**DÉCIMO:** Que del texto previamente transcrito, resulta palmario que el legislador sólo ha establecido en forma expresa, como sanción para el incumplimiento por parte de la policía de lo dispuesto en el citado artículo 41, la imposición de una multa a beneficio fiscal al funcionario infractor, sin que el retardo en la entrega de las sustancias estupefacientes decomisadas constituya un vicio procesal que genere por sí solo la falta de validez de dicha evidencia, ni de las pruebas que puedan derivar de la misma -como se plantea en este caso con el protocolo de análisis de la droga-, pues tal infracción no



acarrea necesariamente el quebrantamiento de la cadena de custodia, entendida ésta como el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta su valoración por los encargados de administrar justicia y que tiene como fin no viciar el manejo que de ellos se haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones.

**UNDÉCIMO:** Que, en efecto, la sola circunstancia que la droga haya sido remitida por la policía al Instituto de Salud Pública fuera del plazo que prevé el mentado artículo 41, no genera como consecuencia necesaria una falta de certeza sobre la calidad de dicha evidencia ni sobre las conclusiones arribadas a su respecto, por cuanto dicha irregularidad en el traspaso no revela indefectiblemente alguna alteración, sustitución o contaminación de la misma.

Al respecto, conviene tener presente que la cadena de custodia, considerada en los sistemas penales de corte acusatorio, como una de las garantías particulares que integran la noción del debido proceso, tiene como finalidad asegurar al juzgador que la evidencia física que se le presenta en el juicio, sea la misma que se recolectó en el sitio del suceso, es decir, que no ha sido alterada, cambiada o destruida, para con ello darle un sentido de veracidad, no sólo a la prueba, sino a la forma en que se recolectó y procesó la misma. De igual modo, si bien nuestro Código Procesal Penal no regula de manera sistemática la forma y procedimiento de la cadena de custodia del material probatorio, ésta se desprende de los artículos 181 y 188 del citado cuerpo legal, que imponen al Ministerio Público la obligación de consignar y asegurar todo cuanto condujere a la comprobación del hecho y a la identificación de los partícipes en el mismo, como la de conservar las especies



recogidas durante la investigación, de modo de evitar que se alteren de cualquier forma y garantizar su debida preservación e integridad.

De este modo, si bien la cadena de custodia de los indicios materiales encuentra su fundamento en el debido [proceso](#), para que se genere alguna duda sobre la certeza y seguridad de este procedimiento de control, no basta el mero retardo en el traspaso de la droga, que regula el artículo 41 de la Ley N° 20.000, sino que se requiere generar algún cuestionamiento directo que afecte la identidad e integridad de la evidencia, asunto que no ha ocurrido en la especie, pues la alegación de la defensa en torno a la manipulación de la sustancia incautada resulta ser meramente hipotética y eventual, sin que se haya planteado alguna duda consistente de que haya sido alterada o sustituida, manteniéndose, entonces, indemne.

**DUODÉCIMO:** Que, de acuerdo a lo anterior, si bien en este caso se ha constatado un retraso en el proceso de traspaso de las sustancias incautadas, relativa al plazo, que en todo caso resulta explicable por la circunstancia que dicha incautación fue efectuada un día viernes y que el Servicio de Salud no funciona el fin de semana, ésta no genera como consecuencia la exclusión de esa evidencia o la ausencia de su valor probatorio ni de las pericias derivadas, pues aquella no produce forzosamente la falta de certeza sobre cualquier conclusión que pudiera derivarse de la misma. (SCS Rol N° 3657-10 de 23 de agosto de 2010).

Por lo demás y tal como lo señalan los autores Horvitz y López, *“la problemática antes tratada ha de ser distinguida de aquella referida al control sobre la licitud de la prueba, esto es, sobre la falta de observancia de los derechos constitucionales del afectado en la obtención de la evidencia”* (Horvitz



L. y López M., Derecho Procesal Penal Chileno, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, año 2002, página 184).

En efecto, en este caso –conforme se razonó precedentemente- no existe cuestionamiento en torno al hecho que la sustancia estupefaciente fue incautada de manera lícita por parte de la policía, en el procedimiento realizado por los funcionarios de Carabineros de Chile el día 30 de marzo de 2018, de modo tal que bajo ningún pretexto era ni es aplicable la norma del artículo 276 inciso tercero del Código del ramo, pues ésta disposición legal sólo permite excluir en la audiencia de preparación del juicio oral las pruebas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales, situación que, como se dijo, no ocurrió en este proceso.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, asimismo, la conclusión que el simple incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Drogas, no genera una infracción a la cadena de custodia ni la consecuente infracción al debido proceso, resulta coherente con lo sostenido por el profesor Hernández, en cuanto a que: *“la inobservancia de garantías fundamentales representa algo más que la mera inobservancia de la legalidad ordinaria, de suerte que para afirmarla no puede bastar la infracción de ley en la obtención de la prueba, sino que además se requiere que la infracción puede vincularse de modo tal con una garantía fundamental que puede conceptualizarse como una afectación a la misma* (Hernández B., Héctor. La exclusión de la Prueba Ilícita en el Nuevo Proceso Penal Chileno, Colecciones de Investigaciones Jurídicas, Universidad Alberto Hurtado, 2004 N° 2).

**DÉCIMO CUARTO:** Que, conforme a lo razonado, tanto la entrega tardía de la sustancia incautada por parte de la policía, como la incorporación de las pruebas derivadas de la misma en la audiencia de juicio oral en



particular, la pericia química y su posterior valoración por los jueces del Tribunal de Juicio Oral, no generan una infracción al derecho al debido proceso, ni menos sustancial, sino sólo el incumplimiento de una norma legal, cuya inobservancia se encuentra reprimida expresamente por el legislador con una sanción extraprocesal dirigida al funcionario infractor, en virtud de lo cual no se configura la denuncia efectuada por el defensor, en su segundo segmento de la causal invocada en este recurso de nulidad.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, sin perjuicio de lo anterior, esta Corte ha resuelto uniformemente que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento (SCS Roles N° 2.866-2013 de 17 de junio de 2013, 4.909-2013 de 17 de septiembre de 2013; 21.408-14 de 8 de septiembre 2014; 28.109- 18, de 4 de febrero de 2019 y 21-2019, de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve), situación que no se ha advertido en la especie, razones todas por las que el presente recurso de nulidad no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo establecido en los artículos 372, 373 letras a) y b), 374 letras c) y e), 376 y 384 del Código



Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa de acusado Alberto Rodolfo González Olivares en contra de la sentencia condenatoria en la causa RUC N° 1701165262-K y RIT 30-2020, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de La Serena el veinticuatro de febrero pasado, y contra el juicio oral que le antecedió, los que en consecuencia, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Contreras.

Rol N° 17.413-21

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., los Ministros Suplentes Sres. Hernán González G, Roberto Contreras O., y la Abogada Integrante Sra. Pía Tavorlari G. No firman los Ministros Suplentes Sres. González y Contreras, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido ambos su período de suplencia.





En Santiago, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

